



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
 Radicación: 05001-31-05-021-2017-00416-01
 Demandante: Diógenes Ribon Méndez
 Demandado: Positiva Compañía de Seguros S.A., Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez
 Asunto: Apelación sentencia
 Procedencia: Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
 Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
 Temas: Pensión de invalidez, contradicción dictámenes

Medellín, enero veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de Noviembre del 2020, en el proceso Ordinario laboral de primera instancia instaurado por el Señor DIÓGENES RIBON MENDEZ en contra de la ARL POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y JUNTA NACIONAL DE

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, Radicado 05001-31-05-021-2017-00416-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor DIÓGENES RIBON MENDEZ, instauró demanda ordinaria laboral, en contra de la ARL POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, pretendiendo se declare que tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, de origen profesional, ocasionada en el accidente de trabajo sufrido el 25 de septiembre del 2010, contrario a lo indicado por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; se condene a la ARL Positiva a reconocer la pensión de invalidez de origen profesional, desde la fecha de estructuración de la misma y subsidiariamente se ordene la reliquidación de la indemnización sustitutiva por incapacidad permanente parcial, en caso de no reconocerse la pensión de invalidez; se condene al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de los valores objeto de condena al momento de su pago efectivo.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el actor sufrió un accidente de trabajo el 25 de septiembre del 2010, cuando laboraba para la empresa Río Arriba Ltda., accidente que ocurrió mientras el actor levantaba unos bultos de zanahoria, uno de ellos se le cayó, golpeándole fuertemente el oído y su hombro izquierdo, teniendo varias secuelas, siéndole diagnosticada una hipoacusia neurosensorial, por el trauma en el oído izquierdo con hematoma, manguito rotador izquierdo, bursitis aguda y ruptura parcial del supra espinoso, enfermedades que son progresivas, por lo que el caso es considerado como crónico por su médico tratante. El último dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, le

asignó una pérdida de la capacidad laboral al demandante, del 24.91%, estructurada el 26 de junio del 2013, de origen profesional, lo cual no coincide con el estado de salud actual del actor, procediendo la ARL Positiva, a reconocer una indemnización permanente parcial, por valor de \$6.203.000.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, indicó que es cierto que el actor sufrió un accidente de trabajo el 25 de septiembre del 2010, explicando que en la demanda se acumulan todas las patologías, tanto de origen común como profesional, tan es así, que la hipoacusia neurosensorial no ha sido definida como de origen laboral, ello consta en el dictamen No. 650424 del 5 de noviembre del 2014, en el cual se califica el trauma pabellón auricular izquierdo. Narra que mediante dictamen No. 309043 del 22 de junio del 2011, su representada califica la ruptura parcial de supraespinoso hombro izquierdo y síndrome del manguito rotatorio y asigna una pérdida de capacidad laboral del 24.91%, por accidente ocurrido el 22 de junio del 2011, dictamen confirmado tanto por la Junta Regional de Calificación, como por la Junta Nacional de Calificación, entidades que emitieron el diagnóstico único de síndrome de manguito rotador, sin evidenciarse en las calificaciones, la patología de bursitis, como lo pretende hacer ver la parte actora.

Asevera que las patologías que presentó el demandante, no son de carácter progresivo. Explica que el último dictamen expedido, fue el No. 925493 del 8 de octubre del 2014, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el cual confirmó el 24.91% de pérdida de la capacidad laboral asignado por Positiva y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En cuanto a los dineros cancelados por su representada, ésta pagó \$6.203.000 por el 24.91% de pérdida de la capacidad laboral, por el evento del 25 de septiembre del 2010 y por el evento del 22 de junio del 2010 que generó el 11.65% de pérdida de la capacidad laboral, se pagaron \$3.185.493.

A su vez, propuso las excepciones de dictamen en firme; inexistencia del grado de invalidez para adquirir pensión; inexistencia de la obligación; enriquecimiento sin justa causa; prescripción; la genérica o innominada.

Por su parte, la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** indicó que el reporte del accidente del 25 de septiembre del 2010, registra el evento “levantando un bulto sintió dolor fuerte en el hombro y luego el dolor pasa al brazo”, de lo cual no se conocen más circunstancias, explicando que de manera confusa se hace relación a otro accidente laboral diferente, ocurrido el 22 de junio del 2010, sobre el cual también hubo actuación en la Junta Regional. Explica que el caso del actor fue remitido a la Junta Regional, por parte de la ARL Positiva, para calificación de las secuelas del accidente de trabajo ocurrido el 25 de septiembre del 2010, la cual se realizó bajo los diagnósticos de restricción de movimientos de hombro izquierdo, dolor y disminución de fuerza de miembro superior izquierdo, aduce que las eventuales secuelas del accidente del 22 de junio del 2010, son diversas y la Junta Regional no se pronunció sobre las mismas.

Propuso las excepciones de legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen; prescripción.

Finalmente, la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ** expresó que no es cierto lo relacionado con la forma en la cual se dio el accidente de trabajo del actor, informando que el reporte efectuado en la misma fecha del accidente y que contiene la versión del propio trabajador, indica que “levantando un bulto sintió dolor fuerte en el hombro y luego el dolor pasa al brazo”, no ocurriendo ninguna caída de carga sobre el paciente, resaltando que jamás existió la menor referencia sobre un supuesto golpe en el oído, versión que apenas hasta ahora parece recobrar lugar en la memoria del actor, pese a no haber recordado tan vital información durante los cuatro años de tratamiento médico especializado y los dos años, siendo entrevistado y evaluado por los calificadores de diversas entidades. Las únicas

secuelas del accidente de trabajo, fueron las que durante cuatro años se documentaron en su historia clínica y ocupacional y radican en restricción en arcos de movilidad articular en hombro izquierdo y dolor residual en hombro izquierdo, la supuesta hipoacusia y trauma en oído, nunca aparecieron en su historial médico, porque el paciente no las presentaba y mucho menos estas súbitamente descubiertas contingencias, tendrían relación con un accidente acaecido hace más de 8 años.

Continúa indicando que ninguno de los especialistas que han tratado al accionante, esto es, fisiatría, ortopedia, clínica del dolor y terapia ocupacional, han considerado que sus secuelas fueran progresivas, esta afirmación solo tiene sustento en las conjeturas subjetivas del paciente y su apoderado, situación absolutamente distinta es que el dolor residual en hombro izquierdo si ha sido catalogado como crónico y que en efecto agotados los tratamientos a lugar, ya no hay probabilidades de mayor recuperación, pero sus secuelas ya están plenamente consolidadas y no son de carácter progresivo, contrario a ello, el parte de los especialistas, tendía a una evolución favorable si el paciente acogía las medidas terapéuticas ordenadas. Agrega que el paciente si tuvo una rehabilitación integral y prueba de ello, es la recuperación en los arcos de movilidad de su hombro, pese a la resistencia pasiva de su parte, para no movilizar la extremidad, como lo constataron los especialistas en fisiatría y terapia ocupacional tratantes, siendo claro que el paciente no presenta un estado de invalidez.

Como mecanismo de defensa, formuló las excepciones de legalidad del dictamen por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia del petitum – inexistencia de prueba idónea para controvertir dictamen – carga de la prueba a cargo del contradictor; inexistencia de pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez – competencia del Juez laboral; buena fe de la parte demandada; la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 24 de noviembre del 2020, el Juzgado de conocimiento absolvió a Positiva Compañía de Seguros, Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de las pretensiones del demandante; declaró probada la excepción de validez de la calificación realizada por la Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; no condenó en costas.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

El apoderado del actor, interpone el recurso de apelación, indicando que, por inconvenientes de tipo económico, no pudo practicarse una nueva valoración del demandante por parte de la Universidad de Antioquia y ello era importante, dado que se planteaba contradicción a los dictámenes que ya obraban en el expediente, siendo necesario que, en segunda instancia, de ser el caso, se tenga en cuenta dicha prueba.

Asevera que el Juez hace una valoración sobre las circunstancias de la enfermedad del demandante, en el sentido de tener que las mismas son comunes y no profesionales, pero no tiene en cuenta, que en el accidente de trabajo, se ocasionaron lesiones, que le generaron dolores y pérdidas fisiológicas permanentes al actor, ya que si bien la hipoacusia es bilateral, ya se ha discutido en muchos escenarios judiciales, la existencia de patologías que degeneran por su estado o por su origen, en otros órganos, es decir, en este caso no puede simplemente decirse que como la hipoacusia es de ambos oídos y el golpe fue en un solo oído, entonces es de origen común. Explica que la jurisprudencia ha dicho que cuando se afecta un órgano que funciona en par, al haber mal funcionamiento de uno de ellos, se genera el daño del otro, así que para la valoración acerca del tipo de origen de la enfermedad, no bastaba

con establecerse simplemente que, al no haberse golpeado los dos oídos, no era de tipo profesional.

Así las cosas, al no haberse realizado una debida valoración del origen de la pérdida de la capacidad laboral, por la hipoacusia y por los trastornos emocionales, así como por la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, solicita que el Superior haga una revisión del caso, que se practique la prueba o se tenga en cuenta la misma consistente en la valoración por parte de la Universidad de Antioquia y que se haga una revaloración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, teniendo para todos los efectos, que ésta es de origen profesional.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de la codemandada Positiva Compañía de Seguros S.A, indicando que la Corte Constitucional, ha señalado que sólo cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral sea superior al 50%, es posible sumar patologías comunes y laborales, siendo responsable del pago de dicha pensión, la entidad de seguridad social a cargo de quien se haya estructurado la última patología calificada, lo cual no ocurre en este caso, siendo claro que existe una falta de evidencia probatoria, que permita desvirtuar la presunción legal de que las patologías se presumen comunes, como lo dijo el fallo apelado, por lo cual solicita se confirme la decisión de primera instancia.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes

quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el actor nació el 23 de abril de 1984 –ver folio 64-.
- Que el accionante sufrió un accidente de trabajo el 22 de junio del 2010, según formato de reporte de accidente de trabajo –ver folio 151 e igualmente se reporta presunto accidente ocurrido el 25 de septiembre del –ver folio 169-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia objeto de apelación proferida en el presente proceso por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, verificando si el señor Diógenes Ribon Méndez, se encuentra jurídicamente en estado de invalidez y si reúne los requisitos exigidos para ser beneficiario de la prestación económica deprecada?

2.4.- TESIS

Problemas jurídicos que resuelve la Sala, bajo la tesis según la cual, el demandante no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, en tanto que no acredita un porcentaje de pérdida de capacidad

laboral, igual o superior al 50%, por lo tanto, es procedente CONFIRMAR la Sentencia.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 9 de la Ley 776 del 2002, establece los requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen profesional, veamos:

“ARTÍCULO 9o. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Unico de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas”.

2.6.- CASO CONCRETO

Del estado de invalidez

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece el procedimiento en sede administrativa para la calificación de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y la fecha de estructuración, señalando los organismos competentes para realizar esta calificación, que lo son, en primera instancia, las EPS, las ARL, las aseguradoras que tienen a su cargo seguros previsionales de invalidez y en caso de inconformidad la Junta Regional de Calificación de Invalidez y en segunda instancia con ocasión del recurso de apelación frente al dictamen de la

Junta Regional de Invalidez, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, siendo esta última el organismo de cierre.

Los dictámenes que profieren los organismos autorizados, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, pueden ser controvertidos por vía judicial, así lo establece el artículo 44 del Decreto 1352 del año 2013, que dispone lo siguiente:

“Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del régimen de seguridad social integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”.

Se deduce de la norma citada, que los dictámenes que se emiten en sede administrativa no tienen carácter definitivo, en la medida en que el interesado, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, a efectos de controvertirlos y para ello podrá apoyarse en otras calificaciones técnicas.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente a este punto y en relación con el valor probatorio que debe darse a los dictámenes emitidos por la Juntas de Calificación en el trámite administrativo, ha fijado reglas uniformes, según las cuales los dictámenes de las Juntas son un elemento probatorio más, que puede ser valorado por el Juez y por lo tanto, es dable que en sede judicial, el fallador se aparte de las conclusiones contenidas en dictámenes emitidos por los organismos de la seguridad social competentes para la calificación, en particular de las Juntas de Calificación de Invalidez, ese criterio esta contenido, entre otros pronunciamientos en las sentencias radicación SL, Radicación 29622 del 19 de octubre del 2006, SL, Radicación 32617 del 23 de septiembre de 2008, SL, Radicación, 35450 del 18 de

septiembre de 2012, SL 52072 del 9 de abril de 2014 y la sentencia SL 16374 del 4 de noviembre del año 2014, entre otras.

A este respecto, la alta Corporación en la sentencia SL, Radicación 35450 del 18 de septiembre del año 2012, indicó:

“Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para ‘decidir’ el derecho. Sólo el juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada por colaboración”.

Ahora bien, es cierto que esta facultad judicial, no llega hasta reconocer competencias técnicas al Juez, quien para su decisión, necesariamente, tendrá que apoyarse en un dictamen pericial, esto es, aquél que, de acuerdo con la valoración probatoria, le ofrece mayor certeza, así quedó precisado, de tiempo atrás, en la sentencia SL, Radicación 29622 del 19 de octubre del 2006 *“Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.”*

De ahí que la decisión del problema jurídico necesariamente conduce a que el fallador acoja el dictamen que mayor convencimiento le genera, atendiendo al

principio de libre formación del convencimiento, establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Atendiendo a la prueba obrante en el plenario, se puede concluir que el demandante sufrió dos accidentes de trabajo, así:

- 1) El 22 de junio del 2010, el cual generó una pérdida de la capacidad laboral del 11.65%, estructurada el 16 de octubre del 2013, autorizando Positiva el pago de \$3.185.493, correspondiente a –ver folio 118-.
- 2) El 25 de septiembre de 2010, una pérdida de la capacidad laboral del 24.91%, estructurada el 26 de junio del 2013, procediendo Positiva, a reconocerle una indemnización por incapacidad permanente parcial, autorizando el pago de \$6.203.000, por -ver folios 15 y 120-.

Sin embargo, atendiendo al escrito de demanda, solo se alude a las secuelas generadas por el segundo accidente acaecido al accionante, o sea, al que se presentó el 25 de septiembre del 2010, respecto al cual se aduce el estado de invalidez.

En el presente caso, obran en el plenario tres dictámenes de calificación de pérdida laboral realizados al señor Diógenes Ribon Méndez, relacionados con el accidente padecido por el mismo el 25 de septiembre del 2010, los cuales reportan lo siguiente:

	POSITIVA (95 a 101)	JUNTA REGIONAL CALIFICACION INVALIDEZ ANTIOQUIA (fls. 102 a 105)	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ (fls. 109 a 117)
MANUAL UNICO DE CALIFICACION DE INVALIDEZ	DECRETO 917 DE 1999	DECRETO 917 DE 1999	DECRETO 917 DE 1999

FECHA DICTAMEN	22 de junio de 2011	9 de octubre del 2013	8 de octubre del 2014
PÉRDIDA CAPACIDAD LABORAL	22.41%	24.91%	24.91%
ESTRUCTURACIÓN	26 de junio de 2013	26 de junio de 2013	26 de junio de 2013
ORIGEN	Profesional	Profesional	Profesional
DEFICIENCIA	10.16%	10.16%	10.16%
DISCAPACIDAD	2%	3.50%	3.50%
MINUSVALÍA	10.25%	11.25%	11.25%
PATOLOGIAS		- Síndrome de manguito rotatorio	- Síndrome de manguito rotatorio

En el asunto bajo estudio, el recurso de apelación presentado por el apoderado del demandante, plantea como pilares de su inconformidad, el no haberse podido practicar el dictamen ordenado a la Universidad de Antioquia, por inconvenientes de tipo económico, indicando que, si es necesario, en segunda instancia, se tenga en cuenta dicha prueba, al respecto advierte la Sala, que no se cumplen los requisitos del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, que dispone *“Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica..”*, en el sublite el dictamen fue decretado desde 16 de enero de la pasada anualidad, sin que la parte interesada haya procurado su diligenciamiento, pese a ser requerida por el A quo, para el efecto.

Conforme a lo anterior, debe decirse, que este proceso se quedó huérfano de la prueba idónea con la cual puedan controvertirse los dictámenes practicados al actor en sede administrativa, sin que pueda el Juez Laboral, proceder de *mutu proprio* a modificar o restarle validez al dictamen emitido por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, sin apoyo de otro dictamen pericial.

En adición a lo anterior, la demanda no es clara, en cuanto a indicar cuales son los defectos técnico- científicos de los que adolecen los dictámenes practicados al actor, limitándose, simplemente, a expresar que los mismos no se compadecen con el estado de salud actual del promotor del proceso.

Finalmente, en cuanto a la discusión planteada por el apoderado del actor en su recurso de apelación, consistente en que no podría el señor Juez, descalificar el hecho de que la hipoacusia bilateral sufrida por su representado, no fuera producto del accidente de trabajo padecido por el mismo, es un planteamiento que requiere el apoyo de expertos, que le permita a esta Sala de Decisión, llegar a la conclusión distinta a la del fallador de primer grado y apartarse de los dictámenes practicados, con el cual, se reitera no se cuenta en este proceso.

Por las razones anteriores, es procedente CONFIRMAR la decisión. Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario instaurado por el señor DIÓGENES RIBON MENDEZ en contra de la ARL POSITIVA S.A., JUNTA REGIONAL DE

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.


2.- Sin costas en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen

El fallo anterior queda notificados a las partes por Estados, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente sentencia fue notificada por estado No. **015** fijado en la secretaria de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1 de febrero de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario